

## PROYECTO DE LEY

### **REGULARIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL “SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS, CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES” Y ADECUACIÓN DEL MISMO AL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD REPUBLICANA.**

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de Ley;

**ARTÍCULO 1º.-** Modificase el art. 3º de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 3º — De la integración. El Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes está integrado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Consejo Federal de Mecanismos Locales, los mecanismos locales que se designen de conformidad con esta norma, y aquellas instituciones gubernamentales, entes públicos y organizaciones no gubernamentales interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes.”

**ARTÍCULO 2º.-** Modificase el art. 5º de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 5º — De los principios. Los principios que rigen el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes son:

- a) Fortalecimiento del monitoreo. La presente ley promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los lugares de detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. En ninguna circunstancia podrá considerarse que el establecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes implica una restricción o el debilitamiento de esas capacidades;

- b) Coordinación. Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes actuarán en forma coordinada y articulada;
- c) Complementariedad. Subsidiariedad. Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes actuarán en forma complementaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

La Procuración Penitenciaria de la Nación actuará en forma subsidiaria en todas las jurisdicciones del país para garantizar el funcionamiento homogéneo del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes;

- d) Cooperación. Las autoridades públicas competentes fomentarán el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la presente ley.”

**ARTÍCULO 3°.-** Derogase el art. 6° de la ley 26.827.

**ARTÍCULO 4°.-** Modificase el art. 7° de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 7° — De las funciones. Corresponde a la Procuración Penitenciaria de la Nación:

- a) Actuar como órgano rector, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y particularmente de los mecanismos locales que se creen o designen de conformidad con la presente ley, teniendo en cuenta las recomendaciones, decisiones y propuestas del Consejo Federal, para una aplicación homogénea del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

- b) Realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de acuerdo con la definición prevista en el artículo 4° de la presente ley. Las visitas podrán ser de carácter regular o extraordinario y sin previo aviso, acompañados por personas idóneas elegidas por la Procuración Penitenciaria de la Nación;

- c) Recopilar y sistematizar información de todo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como de cualquier otra fuente que considere relevante, sobre la situación de las personas privadas de libertad en el territorio de la República Argentina, organizando las bases de datos propias que considere necesarias;

- d) Sistematizar los requerimientos de producción de información necesarios para el cumplimiento del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes provenientes de todo el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y elaborar el programa mínimo de producción de información que deberán ejecutar las autoridades competentes;
- e) Crear, implementar y coordinar el funcionamiento del Registro Nacional de casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de un Registro Nacional de Acciones Judiciales de Hábeas Corpus motivadas en el agravamiento de condiciones de detención;
- f) Mantener actualizados los estándares y criterios de actuación, y promover su aplicación uniforme y homogénea por parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en las siguientes materias: I) Inspección y visita de establecimientos de detención; II) Condiciones de detención; III) Capacidad de alojamiento y control de sobrepoblación; IV) Empleo de la fuerza, requisita y medidas de sujeción; V) Régimen disciplinario; VI) Designación de funcionarios; VII) Documentación e investigación de casos de tortura o malos tratos; VIII) Régimen de traslados; IX) Fortalecimiento de los controles judiciales; X) Todas aquellas que resulten medulares para el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la presente ley. A tales efectos, tendrá en cuenta las recomendaciones y propuestas efectuadas por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura. En todo aquello que no esté previsto por la Procuración Penitenciaria de la Nación, se utilizarán las pautas, estándares y recomendaciones de buenas prácticas producidos por los colegios profesionales, universidades, y declaraciones de las organizaciones sociales nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en las temáticas específicas, las leyes y reglamentos en materia de higiene, salubridad, construcción y seguridad que puedan ser aplicados por analogía, y las declaraciones de los organismos internacionales que hayan establecido consensos sobre estándares aplicables a este tipo de instituciones;
- g) Diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y promover la aplicación de sus directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal;
- h) Adoptar medidas dirigidas a garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de

Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

- i) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Federal de Mecanismos

Locales para la Prevención de la Tortura;

- j) Poner en conocimiento del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la prevención de la Tortura el plan de trabajo y los informes de actuación, inspección y temáticos;
- k) Promover de acuerdo con las decisiones y recomendaciones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, la creación o designación, y el fortalecimiento técnico, administrativo y presupuestario de los mecanismos locales en todo el país según los estándares establecidos en la presente ley;
- l) Asesorar y capacitar a entidades u organismos públicos o privados que tengan vinculación con su actividad, así como al personal afectado a los lugares de detención y a las personas privadas de libertad;
- m) Generar vínculos de cooperación con los órganos de tratados y procedimientos especiales de los sistemas regionales e internacionales de promoción y protección de los derechos humanos;
- n) Representar al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ante el Subcomité para la Prevención de la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura;

ñ) Comunicar a las autoridades nacionales o provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los magistrados y funcionarios judiciales que correspondan, la existencia de hechos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes denunciados o constatados por la Procuración Penitenciaria de la Nación o los Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Solicitar la adopción de medidas especiales urgentes para el cese del maltrato y su investigación y para la protección de las víctimas y/o de los denunciantes frente a las posibles represalias o perjuicios de cualquier tipo que pudiera afectarlos.”

**ARTÍCULO 5º.-** Modificase el art. 8º de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 8º — De las facultades y atribuciones. Para el cumplimiento de las funciones que establece la presente ley, la Procuración Penitenciaria de la Nación tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

- a) Solicitar datos, información o documentación a los responsables de centros públicos y/o privados en los que se encuentren personas privadas de libertad, a toda otra autoridad pública nacional y/o provincial y/o municipal, así como al Poder Judicial y Ministerio Público en el ámbito nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual facultad tendrá respecto a las organizaciones estatales y no estatales integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas

Cruelles, Inhumanos o Degradantes sobre el funcionamiento del mismo;

- b) Acceder a la documentación, archivos y/o expedientes administrativos y/o judiciales donde conste información sobre personas privadas de libertad y/o sobre sus condiciones de detención y/o sobre el funcionamiento de los lugares de encierro;
- c) Entrevistar a personas privadas de libertad en forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el lugar que considere más conveniente;
- d) Ingresar a los lugares de detención en los que se encuentren o pudieren encontrarse personas privadas de su libertad con teléfonos celulares, computadoras, grabadoras, cámaras fotográficas y/o de filmación, o todo otro elemento necesario para la realización de sus tareas;
- e) Mantener reuniones con familiares de personas privadas de libertad, magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros profesionales de la salud, integrantes de los distintos servicios penitenciarios o instituciones de detención o alojamiento, y con todas aquellas personas y organismos públicos o privados que la Procuración

Penitenciaria de la Nación considere necesario para el cumplimiento de su mandato;

- f) Decidir la comparecencia de los funcionarios y empleados de los organismos y entes vinculados con los lugares de encierro con el objeto de requerirles explicaciones e informaciones sobre cuestiones referidas a su objeto de actuación;
- g) Realizar acciones para remover los obstáculos que se les presenten a los demás integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes en el ejercicio de sus funciones, en particular, en relación con el acceso a los lugares de detención y a la información que solicite en virtud de la presente ley;
- h) Desarrollar acciones y trabajar juntamente con las organizaciones no gubernamentales y/o instituciones públicas locales en las jurisdicciones en las que no exista un mecanismo local creado o designado para el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes;

- i) Recomendar a los mecanismos locales acciones vinculadas con el desarrollo de sus funciones para el mejor cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes;
- j) Supervisar el funcionamiento de los sistemas disciplinarios y de ascensos de aquellas instituciones del Estado nacional, de las provincias y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tengan a su cargo la administración, control, seguridad o custodia de los lugares de detención y promover la aplicación de

sanciones administrativas por las violaciones a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales que compruebe la Procuración

Penitenciaria de la Nación en el ejercicio de sus funciones;

- k) Emitir opinión sobre la base de información documentada en los procesos de designación y ascenso de magistrados y funcionarios judiciales vinculados con sus competencias;
- l) Diseñar y proponer campañas públicas de difusión y esclarecimiento sobre los derechos de las personas en situación de encierro;
- m) Proponer reformas institucionales para el cumplimiento de los fines del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y ser consultado en las discusiones parlamentarias vinculadas con la situación de las personas privadas de libertad en todo el territorio de la República

Argentina;

- n) Promover acciones judiciales, individuales y colectivas, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines;
- ñ) Poner en conocimiento de lo actuado a los jueces a cuya disposición se encontraran las personas privadas de libertad, pudiendo, a la vez, expresar su opinión sobre algún aspecto de hecho o de derecho, en carácter de “amigo del tribunal”;
- o) Articular sus acciones con universidades, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de libertad y demás organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en defensa de los derechos de personas privadas de libertad a nivel nacional, provincial y municipal. La coordinación de acciones podrá realizarse mediante la firma de convenios, elaboración de informes o visitas conjuntas;
- p) Nombrar y remover a su personal, y dictar los reglamentos a los que deberá ajustarse;
- q) Adquirir bienes de cualquier tipo; abrir y administrar cuentas bancarias, y celebrar cualquier tipo de contrato necesario para el cumplimiento de sus fines y funciones;
- r) Asignar a los funcionarios que considere idóneos, las atribuciones que considere adecuadas para un eficiente y ágil funcionamiento;
- s) Asegurar la publicidad de sus actividades;
- t) Elaborar y elevar anualmente su proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación para su incorporación al proyecto de ley general de presupuesto;

- u) Realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus fines y funciones.

**ARTÍCULO 6º.-** Modificase el art. 9º de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 9º — De las intervenciones específicas e informes de situación y temáticos. La Procuración Penitenciaria de la Nación podrá realizar recomendaciones, así como cualquier otra actuación necesaria para el cumplimiento de sus funciones específicas. Las autoridades públicas o privadas requeridas por la Procuración Penitenciaria de la Nación deberán responder sus solicitudes en un plazo no mayor a veinte (20) días.

La Procuración Penitenciaria de la Nación podrá realizar informes de situación y/o temáticos. Los informes serán remitidos a las autoridades competentes y a las autoridades federales en su carácter de garantes del cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina en la materia.

En caso de considerarlo necesario, en el momento de remitir los informes, la Procuración Penitenciaria de la Nación podrá fijar un plazo diferente a los veinte (20) días para obtener respuesta de las autoridades competentes. En el plazo fijado al efecto, las autoridades deberán responder fundadamente sobre los requerimientos efectuados, así como comunicar el plan de acción y cronogramas de actuación para su implementación.

En caso de no obtener respuesta en el plazo fijado al efecto o de resultar insuficiente, la Procuración Penitenciaria de la Nación podrá poner en conocimiento de esta situación a la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, en adelante Comisión Bicameral, a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, a los poderes ejecutivos nacionales y/o provinciales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A su vez, frente a esta situación, la Procuración Penitenciaria de la Nación podrá convocar a los empleados, funcionarios y/o autoridades competentes con el objeto de requerirles explicaciones o informaciones.

La falta de pronunciamiento en tiempo y forma por una autoridad respectiva ante un emplazamiento dispuesto por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en los términos de este artículo, o su manifiesta negativa a cooperar en el examen a que fue convocado hará incurrir al responsable en la figura prevista y reprimida por el artículo 249 del Código Penal.

La Procuración Penitenciaria de la Nación, si lo estimara conveniente, podrá dar a publicidad las gestiones y/o informes de situación realizados. Asimismo, podrá convocar a mesas de diálogo o audiencias públicas.”

**ARTÍCULO 7º.-** Modificase el art. 10º de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 10. — De los informes anuales. La Procuración Penitenciaria de la Nación presentará un informe anual ante la Comisión Bicameral. El informe deberá ser presentado antes del 31 de mayo de cada año.

El informe anual contendrá un diagnóstico de la situación de las personas privadas de libertad en el país y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia. En lo posible, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentará la información por provincias y autoridad competente. La Procuración Penitenciaria de la Nación definirá aquellos indicadores que permitan un mejor registro de la información y su comparación anual. A su vez, el informe incluirá un anexo con el detalle de la ejecución del presupuesto correspondiente al período.

La Procuración Penitenciaria de la Nación también presentará su informe anual ante el Poder Ejecutivo nacional, los consejos federales de Derechos Humanos, Penitenciario, de Seguridad Interior y Niñez y ante toda otra autoridad que considere pertinente.

La Procuración Penitenciaria de la Nación pondrá en conocimiento de su informe a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, y a toda otra autoridad que considere pertinente. Asimismo, remitirá su informe anual al Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El informe será público desde su remisión a la Comisión Bicameral.”

**ARTÍCULO 8°.-** Derogase el Capítulo IV de la ley 26.827.

**ARTÍCULO 9°.-** Modificase el art. 21 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 21. — De la creación e integración. Créase el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, que estará integrado por los mecanismos locales que se creen o designen de conformidad con el Título III de esta ley.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán una sola representación, sin perjuicio de que hubieran creado más de un mecanismo provincial o de que integren uno regional. En este último caso, éste tendrá tantos votos como provincias lo integren.”

**ARTÍCULO 10°.-** Modificase el art. 22 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 22. — De las funciones. Son funciones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura:

- a) Reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 y dictar su propio reglamento;

b) Elevar, a la Procuración Penitenciaria de la Nación, propuestas y estudios destinados a mejorar su plan de trabajo, en función de lo establecido en el artículo 7º, inciso j). A tales efectos, podrá proponer a la Procuración Penitenciaria de la Nación líneas de trabajo y medidas de inspección, a partir del diagnóstico nacional al que se llegue en las reuniones plenarias del Consejo;

c) Proponer criterios y modificaciones a los estándares de actuación elaborados por la

Procuración Penitenciaria de la Nación, de acuerdo con el artículo 7º, inciso f);

d) Colaborar en la difusión de la información y las recomendaciones generadas por la

Procuración Penitenciaria de la Nación;

e) Decidir sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley para los mecanismos locales creados o designados por las provincias y la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires;

f) Evaluar el funcionamiento de los mecanismos locales y proponer a la Procuración

Penitenciaria de la Nación las acciones a seguir para suplir las falencias que se detecten;

g) Intimar a las provincias y/o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que designen o creen el o los mecanismos locales correspondientes;

h) Designar, a propuesta de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el o los organismos gubernamentales o no gubernamentales que cumplirán la función de mecanismo local de prevención de la tortura ante el vencimiento del plazo para la designación o creación provincial, sin perjuicio de las otras funciones subsidiarias que desarrolle la Procuración Penitenciaria de la Nación. Designado o creado el mecanismo local cesará en sus funciones el mecanismo provisorio nombrado por el Consejo Federal;

i) Invitar a la reunión a las organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas que considere pertinentes.”

**ARTÍCULO 11º.-** Modificase el art. 23 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 23. — De las sesiones. El Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura se reúne dos (2) veces al año en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia o extrema necesidad, podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la Procuración Penitenciaria de la Nación o a requerimiento de, por lo menos, el cuarenta por ciento (40%) de los mecanismos locales designados o creados.”

**ARTÍCULO 12°.-** Modificase el art. 24 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 24. — Del funcionamiento y sistema de decisiones. El Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura funcionará con la Procuración Penitenciaria de la Nación y los mecanismos locales creados que representen, al menos, cuatro (4) provincias.

Tomará sus decisiones por mayoría simple de los representantes presentes.

Todas las sesiones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura serán públicas excepto que, por razones fundadas, se decida que serán total o parcialmente reservadas.

**ARTÍCULO 13°.-** Modificase el art. 25 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 25. — Del soporte administrativo. La organización y ejecución de sus actividades y funciones propias será realizada a través de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que deberá contar con un área dedicada al efecto.”

**ARTÍCULO 14°.-** Derogase el Capítulo VI de la ley 26.827.

**ARTÍCULO 15°.-** Modificase el art. 33 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 33. — Del ámbito de actuación. Sin perjuicio de las disposiciones que dicten las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido por el artículo anterior, los mecanismos locales podrán cumplir tareas de visita y monitoreo en los lugares de detención dependientes de autoridad nacional que se encuentren localizados en su ámbito territorial de actuación.”

**ARTÍCULO 16°.-** Modificase el art. 35 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 35. — De las funciones. Los mecanismos locales deberán tener al menos las siguientes funciones:

- a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia conforme al artículo 4° de la presente ley, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitados para registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes;
- b) Recopilar y sistematizar información sobre la situación de las personas privadas de libertad en el territorio de la provincia, ya sea que estén sujetas a la jurisdicción federal, nacional, provincial o municipal;

- c) Promover la aplicación de los estándares y criterios de actuación elaborados por la

Procuración Penitenciaria de la Nación;

- d) Diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y promover la aplicación de sus recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades competentes.”

**ARTÍCULO 17º.-** Modificase el art. 37 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 37. — De la coordinación. La Procuración Penitenciaria de la Nación, el Consejo Federal y los mecanismos locales creados en virtud de la presente ley intercambiarán información y desarrollarán acciones conjuntas para el cumplimiento de sus funciones.”

**ARTÍCULO 18º.-** Modificase el art. 38 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 38. — De la colaboración. En el desarrollo de sus funciones, la Procuración Penitenciaria de la Nación solicitará la colaboración de los mecanismos locales que creen o designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de cualquier otro integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para el mejor aprovechamiento de los recursos existentes. La coordinación de acciones podrá realizarse mediante la firma de convenios, elaboración de informes o visitas conjuntas.

**ARTÍCULO 19º.-** Modificase el art. 39 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 39. — De los convenios. La Procuración Penitenciaria de la Nación y los mecanismos locales podrán realizar convenios con los ministerios públicos y poderes judiciales nacionales, federales y provinciales a efectos de desarrollar sistemas de información y conformar grupos de trabajo para el desarrollo de actividades vinculadas con la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la presente ley. Para el cumplimiento de estas tareas, la Procuración Penitenciaria de la Nación se podrá integrar con funcionarios designados en comisión de servicios, de acuerdo con las leyes aplicables a cada caso particular.”

**ARTÍCULO 20º.-** Modificase el art. 40 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 40. — De la reunión anual. La Procuración Penitenciaria de la Nación, junto con el Consejo Federal, organizarán al menos una reunión anual de discusión sobre la situación de las personas privadas de libertad en el país y una evaluación del

funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Al efecto, convocarán a los representantes de todos los mecanismos locales. La Procuración Penitenciaria de la Nación podrá invitar a representantes de los ministerios públicos y poderes judiciales nacionales, federales y provinciales, así como a cualquier otro ente público y a las organizaciones de la sociedad civil, interesadas en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a participar del encuentro. Las conclusiones del encuentro se incluirán en el informe anual correspondiente al período.”

**ARTÍCULO 21°.-** Modificase el art. 41 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 41. — De las visitas. Todas las organizaciones no gubernamentales interesadas en la situación de las personas privadas de libertad tendrán la facultad de realizar visitas a los lugares de detención detallados en el artículo 4° de la presente ley, conforme la reglamentación mínima que realice la Procuración Penitenciaria de la Nación. La reglamentación no podrá restringir el nivel de acceso con el que cuentan las organizaciones que realizan visitas al momento de sancionarse la presente ley.

La reglamentación preverá la posibilidad de registrar la visita por medios audiovisuales; la discrecionalidad para seleccionar los lugares de inspección y las personas a entrevistar; así como la realización de entrevistas privadas.”

**ARTÍCULO 22°.-** Modificase el art. 42 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 42. — Del acceso a la información. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 7° c), 8° a) y b), y 35 a) y 36 b) de la presente ley, en relación con la Procuración Penitenciaria de la Nación y los mecanismos locales, todo organismo perteneciente a la administración pública nacional, provincial y/o municipal, tanto centralizada como descentralizada, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas vinculadas con los lugares de encierro, están obligadas a proveer a los restantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, acceso a toda información relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el marco de los objetivos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la presente ley.”

**ARTÍCULO 23°.-** Modificase el art. 43 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 43. — Del acceso a procesos de selección y ascensos. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8° k) y l) de la presente ley, en relación con la Procuración Penitenciaria de la Nación, podrán acceder a toda la información relativa a los procesos

de selección, formación, capacitación, promoción y ascensos de las personas que desarrollen funciones vinculadas con las personas privadas de libertad en todo el territorio de la República Argentina.”

**ARTÍCULO 24°.-** Modificase el art. 47 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 47. — Del deber de confidencialidad. Toda información recibida por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Consejo Federal, proveniente de personas privadas de libertad, familiares, funcionarios o cualquier otra persona u organismo, referida a la situación o denuncia concreta de una persona detenida será reservada salvo autorización de los afectados.

Asimismo, los integrantes y funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación y los mecanismos locales deberán reservar la fuente de los datos e informaciones que obtengan y sobre la que basen sus acciones o recomendaciones.

También deberán preservar la identidad de las víctimas de torturas, apremios, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuando la revelación pudiera colocar a la víctima en situación de riesgo.

Los integrantes y funcionarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de los mecanismos locales se hallan alcanzados por las disposiciones referidas al secreto profesional que corresponde al ejercicio de la abogacía. Este deber de confidencialidad rige para los profesionales e intérpretes que acompañen la visita.”

**ARTÍCULO 25°.-** Modificase el art. 48 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 48. — De las facultades. Las actividades que desarrollen la Procuración Penitenciaria de la Nación y los mecanismos locales, de acuerdo con las competencias de la presente ley, no podrán ser usadas como justificación para restringir las facultades de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad.

**ARTÍCULO 26°.-** Modificase el art. 49 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 49. — De los conflictos. Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que encuentren obstáculos para la realización de sus misiones y funciones podrán recurrir a los mecanismos locales o a la Procuración Penitenciaria de la Nación para resolver los conflictos que se susciten en relación con los alcances de la presente ley.

**ARTÍCULO 27°.-** Modificase el art. 52 de la ley 26.827 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 52. — De la obstaculización. Todo aquel que impida el ingreso irrestricto de la Procuración Penitenciaria de la Nación y/o los mecanismos locales a los lugares de encierro; el contacto en condiciones de privacidad con las personas privadas de libertad; el registro de las visitas; y/o la realización de una denuncia, será pasible de las sanciones previstas en los artículos 239 y 248 del Código Penal. Sin perjuicio de lo anterior, todo aquel que entorpezca las actividades de la Procuración Penitenciaria de la Nación y/o de los mecanismos locales incurrirá en falta grave administrativa.

La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor de la Procuración Penitenciaria de la Nación o de los mecanismos locales, por parte de cualquier organismo o autoridad, puede ser objeto de un informe especial a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, además de destacarse en la sección correspondiente del informe anual previsto en el artículo 10 de la presente ley.

La Procuración Penitenciaria de la Nación y los mecanismos locales pueden requerir la intervención de la justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada por cualquier institución pública o privada.

**ARTÍCULO 28°.**- Derogase el art. 57 de la ley 26.827.

**ARTÍCULO 29°.** - Incorporase a la ley 25.875 el siguiente artículo:

“ARTÍCULO 17 BIS: “La Procuración Penitenciaria de la Nación es órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes creado por ley 26.827.

**ARTÍCULO 30°.** - Comuníquese al Poder Ejecutivo.



RICARDO LÓPEZ MURPHY  
DIPUTADO DE LA NACIÓN

## FUNDAMENTOS

### **Sr. Presidente:**

El presente proyecto tiene como objetivo regularizar institucionalmente el “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes” y, a la vez, adecuarlo al principio de austeridad republicana, consagrado en al art. 2º, inc. b) de la ley 25.188.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura fue creado por el artículo 6º de la ley 26.827 con el objeto de actuar “en forma subsidiaria en todas las jurisdicciones del país para garantizar el funcionamiento homogéneo del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Dicho sistema, asimismo, tiene por objeto “garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos 18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por ley 25.932, y demás tratados internacionales que versaren sobre estos derechos.”

Por su parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación tiene por objeto “...proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, comprendidos comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personas privadas de libertad y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales.”

En consecuencia, la afinidad y, en algunos casos, superposición, de la tarea que lleva adelante la Procuración Penitenciaria de la Nación con los objetivos y competencias previstos en la ley 26.827, tornan apto a este organismo para asumir la labor que, hasta la fecha, viene desarrollando el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

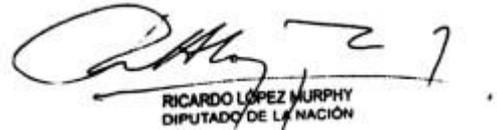
Cabe destacar, asimismo, que la Procuración Penitenciaria de la Nación es una entidad creada en el año 2004, institucional y técnicamente sólida, que goza de una intachable trayectoria en la materia de su conocimiento.

Por otra parte, corresponde resaltar que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, creado más recientemente, en el año 2013, aunque constituido recién en 2017, detenta una costosa estructura, para tratarse de un organismo llamado a actuar de manera subsidiaria, a lo cual debe agregarse que doce de sus 13 (trece) comisionados poseen el mandato vencido, pese a lo cual, continúan en sus cargos y perciben sus haberes.

El artículo 30 de la ley 26.827 estableció que, para su primer ejercicio anual, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura dispondría de un presupuesto no inferior al 3% (tres por ciento) del total asignado para el Congreso de la Nación. En 2020, el presupuesto asignado ascendió a \$ 80.898.862, tal como surge del último informe publicado en la página web del organismo que abarca el período mayo 2019 – mayo 2020.

En definitiva, la existencia de un organismo como la Procuración Penitenciaria de la Nación, con amplia trayectoria en la materia, la costosa estructura del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la irregularidad institucional que importa el vencimiento de los mandatos de 12 (doce) comisionados, justifican plenamente la eliminación del citado Comité y el ejercicio de las competencias que originariamente le fueran conferidas, por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

En razón de todo lo expuesto, pido a mis colegas el acompañamiento del presente proyecto.



RICARDO LÓPEZ MURPHY  
DIPUTADO DE LA NACIÓN